



PAGAR PARA TRABAJAR: EL ELEVADO COSTO DE LOS GASTOS DE RECLUTAMIENTO

Cada año, millones de trabajadores se presentan o son abordados por intermediarios para el trabajo—reclutadores, agentes o corredores—que facilitan el movimiento del trabajo para satisfacer la demanda global. A medida que la globalización cada vez dirige más a los mercados hacia los contratos temporales o de temporada que dependen de la movilidad y la flexibilidad laboral, la importancia de la industria del reclutamiento crece.

Los intermediarios laborales funcionan como un puente entre los trabajadores y los empleadores, como máximo, pueden brindar guía y ayudar a emparejar trabajadores con puestos de trabajo, asistir en la obtención de visados y documentación, revisiones médicas, orientación previa al comienzo, capacitación y viaje. Estos intermediarios oscilan de lo autorizado y legítimo a lo informal y desregulado, y cada vez más, a lo criminal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la importante función del reclutamiento en un mundo globalizado, pero advierte contra su uso en maneras que puedan dañar a los trabajadores:

El reclutamiento debe responder a las necesidades establecidas del mercado laboral, y no servir para desplazar o disminuir una fuerza de trabajo existente, reducir las normas laborales, salarios o condiciones de trabajo, o de otra manera socavar el trabajo decente.

En todo el mundo, trabajadores y sus defensores informan que reclutadores sin escrúpulos con frecuencia utilizan prácticas engañosas y fraudulentas para aprovecharse de los trabajadores, especialmente de aquellos que no tienen acceso a información sobre oportunidades de trabajo y sus derechos. En muchos casos los trabajadores también carecen de acciones de remediación cuando experimentan la explotación.

Los reclutadores deshonestos emplean una variedad de prácticas que en última instancia socavan las condiciones decentes de trabajo: engañan a los trabajadores sobre las condiciones y la naturaleza de un trabajo, se dedican a modificar contratos y a confiscar o destruir los documentos de identidad de los trabajadores evitando que puedan irse. Otra práctica común; cobrar a los trabajadores comisiones para tener oportunidad de trabajar o cubrir los costos del reclutamiento, es un modelo dominante de reclutamiento en gran parte del mundo que contribuye a facilitar delitos tales como la corrupción y el soborno y que coloca a los trabajadores en riesgo de ser explotados, incluyendo la trata de personas.

GASTOS DE RECLUTAMIENTO PAGADOS POR EL TRABAJADOR

En muchos casos los trabajadores con bajos salarios toman prestadas grandes cantidades de dinero para cubrir el costo de los gastos de reclutamiento, que pueden llegar a ser de varios cientos hasta decenas de miles de dólares. Engañados con promesas de salarios altos los trabajadores suelen tomar dinero prestado de su familia o de usureros, o hipotecan sus casas o tierras, creyendo que podrán reembolsar fácilmente sus deudas con el empleo. Esos costos, que también pueden combinarse con tasas de interés injustas y excesivas, implican que los trabajadores dediquen un período de tiempo—a veces años—trabajando exclusivamente para reembolsar lo que deben.

Cuando a los trabajadores se les cobra por gastos de reclutamiento pasan a ser vulnerables a una variedad de abusos, entre ellos la servidumbre por deuda, una forma de trata de personas por la cual los individuos son obligados a entregar prácticamente todo su salario hasta que sus deudas sean saldadas. Los individuos que tienen deudas que deben pagar con sus salarios son reacios a quejarse a su empleador o a los encargados de aplicar la ley, o a dejar el trabajo. Los trabajadores pueden padecer condiciones abusivas ante el temor de perder su empleo y no poder pagar sus deudas. En muchos casos el impago de la deuda resulta en amenazas a familiares o pérdida de propiedades familiares, lo que agrega más presión a los trabajadores para que permanezcan en condiciones de explotación.

CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y POLÍTICAS DEL SECTOR PRIVADO

Actualmente la vagamente definida “industria del reclutamiento” está madura para crear condiciones para la explotación. Las leyes vigentes con frecuencia fallan al asignar cualquier responsabilidad a los agentes reclutadores para proteger a los trabajadores, y los gobiernos ni vigilan activamente a los reclutadores ni exigen remediación cuando estos utilizan prácticas fraudulentas para explotar a los trabajadores. En aquellos países en que están prohibidas las comisiones de reclutamiento, los gobiernos no suelen hacer cumplir con firmeza esas prohibiciones.

En muchos casos puede ser difícil probar que los reclutadores o las agencias de reclutamiento estuvieran al tanto de las circunstancias de explotación en las que el trabajador eventualmente acaba; e incluso si contribuyen al esquema de la trata de personas sin saberlo, sus actividades pueden contribuir de manera importante a la vulnerabilidad del trabajador. Dado que es difícil encausar penalmente a esos reclutadores, el cumplimiento de los reglamentos en torno a las prácticas abusivas de reclutamiento es incluso más importante.

Para muchos negocios utilizar reclutadores es una necesidad y por lo tanto debe tratarse como un costo de las operaciones, pero usar los métodos de reclutamiento que finalmente pasan esos costos a los trabajadores es tanto injusto como insostenible. Todos los empleadores, incluyendo a quienes hacen contratos con los gobiernos, deben hacerse cargo del costo y de la responsabilidad de usar reclutadores y deben dar apoyo y trabajar de cerca con agentes reclutadores con licencias y así prohibir las prácticas de reclutamiento sin escrúpulos. Los empleadores deben estar dispuestos a pagar mayores costos por agencias que de hecho cumplan medidas para evitar la explotación y los gobiernos deben promover políticas de protección a los trabajadores, hacer cumplir los reglamentos laborales, y enjuiciar a los criminales que a sabiendas explotan la vulnerabilidad de los trabajadores.

En años recientes ha habido un creciente consenso en que, por medio de las cadenas de abastecimiento, tanto los gobiernos como el sector privado deben prohibir la práctica de cobrar gastos de reclutamiento a los trabajadores:

- En 2016, representantes de los trabajadores, empleadores y representantes gubernamentales ante la OIT negociaron y aprobaron un texto no vinculante “*Principios generales y directrices prácticas para la contratación equitativa*”. La OIT identificó a los gobiernos como los tenedores de la responsabilidad final para fomentar la contratación justa, e incluyó el principio de “que no se cobrarán honorarios ni ninguna otra tarifa a los trabajadores o a quienes buscan trabajo”.
- En 2011, los Principios de Dhaka para la migración con dignidad incluyeron como su primer principio que no se debe cobrar ninguna comisión a los trabajadores migrantes.
- La Regulación Federal de Adquisición de 2015 de Estados Unidos para terminar la trata de personas prohíbe a los contratistas federales cobrar a los trabajadores costos de reclutamiento, entre otras prácticas engañosas y fraudulentas.
- La Organización Internacional para las Migraciones está elaborando el Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento (IRIS, en inglés) para ofrecer una plataforma para abordar el reclutamiento injusto. La acreditación del programa estará basada en la adhesión de los reclutadores a ciertos principios, uno de los cuales incluye la prohibición de cobrar comisiones a quienes buscan trabajo.
- El Foro de bienes de consumo, una red global formada por más de 400 minoristas, fabricantes y proveedores de servicios que representan 3,5 billones de dólares en ventas, aprobaron una política en 2016 que establece que el empleador, y no el trabajador, debe estar a cargo del costo del reclutamiento.
- El Grupo de Liderazgo para la Contratación Responsable, convocado por el Instituto por los Derechos Humanos y los Negocios, es un grupo formado por importantes compañías que trabajan en conjunto con expertos para resolver el tema de los pagos de comisiones de reclutamiento por los trabajadores. Establecida en 2016, la iniciativa gira en torno al principio del “pago por el empleador”, que establece que “ningún trabajador debe pagar por un trabajo”. Los costos de reclutamiento no deben correr a cuenta del trabajador sino que deben ser asumidos por el empleador. El objetivo del grupo es la erradicación en el curso de la próxima década de las comisiones pagadas por el trabajador.

El acceso a la oportunidad económica es determinante no solo para el sustento de los trabajadores sino también para evitar la trata de personas. Los intermediarios laborales pueden ayudar a conectar a los trabajadores con los empleadores y deben ser compensados por ese trabajo. Sin embargo, con mucha frecuencia los trabajadores son obligados a costear los gastos de su propio reclutamiento, lo que los hace más vulnerables a la explotación. Los gobiernos y el sector privado pueden tomar medidas para eliminar esta práctica y, y al hacerlo, ayudar a crear cadenas de abastecimiento sin trata de personas.